

los elementos esenciales de liquidación, los medios de impugnación y la forma de satisfacer la cantidad exigida. Esta responsabilidad se extenderá a la deuda inicialmente liquidada y notificada al deudor principal en periodo voluntario, no alcanzando a las sanciones pecuniarias impuestas salvo cuando aquella resulte de la participación del responsable en una infracción tributaria.

Para la responsabilidad de los miembros del Consejo Rector se acredita la concurrencia de los siguientes elementos:

a) Existencia de una obligación tributaria pendiente de satisfacer a cargo de la Sociedad Cooperativa Infanta Elena, sin que hayan pasado cuatro años desde la declaración de fallidos del deudor principal y responsables solidarios.

Todo ello se acredita en el expediente ejecutivo por deudas de IPSI primera transmisión.

b) Existencia de una infracción tributaria grave tipificada en el art. 79 a) al dejar de ingresar, dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria.

Así, la normativa reguladora del IPSI, especialmente los artículos 27 y 29 de la Ordenanza reguladora, establece para la primera transmisión de inmuebles la gestión por la modalidad de declaración-liquidación y pago, debiendo los sujetos pasivos por primera transmisión de bienes inmuebles presentar declaración-liquidación (modelo 413) y realizar el ingreso, durante los treinta días naturales siguientes al devengo de la operación (fecha de la escritura pública de compraventa).

c) Existencia de una actuación negligente del Consejo Rector de la Sociedad Cooperativa al no haber realizado los miembros del Consejo Rector los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas a la presentación y pago de la autoliquidación relativa al IPSI primera transmisión, consintiendo el incumplimiento por quienes de ellos dependan, adoptando acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.

El expediente de derivación de responsabilidad se dirige contra los miembros del Consejo Rector bajo cuyo mandato se produjo la infracción tributaria; Así la Ley de Cooperativas en conexión con la normativa tributaria regulan la responsabilidad del Consejo Rector por actos u omisiones contrarios a

la Ley (Ley General Tributaria Art. 79). En éste sentido reiterar que la falta de declaración-liquidación e ingreso de un Impuesto se considera por la Ley General Tributaria como una infracción tributaria grave, y por ende la comisión de dicha infracción ha de considerarse una negligencia grave, máxime cuando en las escrituras públicas que documentan las operaciones gravadas por el IPSI (y que no han sido objeto de declaración-liquidación y pago) se confiesa haber recibido de los cooperativistas el importe correspondiente a dicho Impuesto, sin que se le haya dado el destino preceptivo.

Asimismo, destacar que el referido artículo 40.1 de la Ley General Tributaria, establece la responsabilidad subsidiaria de los administradores no solo por una conducta activa, adoptando acuerdos que hicieran posibles tales infracciones, sino también por una conducta pasiva, no realizando los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, o consintiendo el incumplimiento.

La jurisprudencia considera aplicable el referido artículo 40 de la Ley General Tributaria a los miembros del Consejo Rector de sociedades cooperativas (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana núm. 315/2003 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 20 marzo), dado que de la lectura de la norma legal se deduce que la responsabilidad subsidiaria recae en los administradores de personas jurídicas, y la cooperativa es indudablemente una persona jurídica, dotada de personalidad jurídica propia, confirmando que los miembros del Consejo Rector durante el tiempo en que se produjeron los hechos imponible litigiosos, detentaban la representación y gestión de la Cooperativa deudora (a tenor de los estatutos y del Art. 36 de la Ley 11/1985, de 25 de octubre, de Cooperativas), siéndole por tanto de plena aplicación lo dispuesto en el art. 40.1 de la Ley General Tributaria. ...

d) Condición de miembro del Consejo Rector de la Cooperativa en la fecha de comisión de la infracción por no haber presentado y pagado la autoliquidación relativa al IPSI primera transmisión, como se acredita mediante Certificación del Registro de Sociedades Cooperativas (MAP Delegación de Gobierno de Melilla- Área Funcional de Trabajo) expedida el 9 de febrero de 2004, según la